

**TITULO: IMPACTO DE LA LEY 1709 DEL 2014, FRENTE A
LA CONDUCTA PUNIBLE DE HURTO CALIFICADO ANTE
EL PROBLEMA DE HACINAMIENTO CARCELARIO EN
BARRANQUILLA**

**HAROLD ESMITH RIVALDO GARCIA
DALLANA MILAGRO VIZCAINO ROMERO**

**Trabajo de Investigación como requisito para optar el título de Magister en derecho
penal**

**Tutores
SAMUDIO MOSQUERA PALOMEQUE**

RESUMEN

El problema del hacinamiento carcelario genera sobre los derechos fundamentales y de los bienes jurídicos de los reos en nuestro país, derechos como la vida, la integridad personal y la salud, y bienes jurídicos como el de la dignidad humana el cual está inspirado en nuestra legislación penal desde la academia solicitamos se dé solución a esta problemática debido a que la población carcelaria hace parte de nuestra sociedad.

nuestra investigación está encaminada a entender el problema del hacinamiento carcelario y la agresiva política criminal del estado, frente al delito de hurto calificado, y desde la academia se propone una reforma a la ley 599 del 2009, la ley 906 del 2004 y a la ley 1709 del año 2014, donde se otorgue un tratamiento más flexible a los autores de la conducta de hurto calificado, donde en fase de investigación se otorguen beneficios al procesado con el fin de que se pueda negociar con el ente acusador, figura mediante el cual el procesado indemnice a la víctima, y obtener a favor de la víctima verdad, justicia y reparación, con el compromiso de afrontar la sentencias que emitirá el juzgador, y bajo la premisa del principio de necesidad de la pena, en fase de investigación el juzgador debe tener en cuenta el estado de infra humanidad en que están sometida la población carcelaria, mi propuesta sería una medida extramuros en casa mientras de agotan las etapas del proceso penal con el fin de no agravar el fenómeno de la sobrepoblación carcelaria en nuestro país. Pero también consideramos que se hace necesario que el legislador en una reforma, tenga en cuenta el valor de lo hurtado, porque en muchos casos son valores ínfimos que inclusive, son cuestiones bagatelares y que deben ser manejados como delitos bagatelares y no se les debe aplicar la acción penal que es de ultima ratio.

Otra propuesta sería en fase de investigación es de decir al momentos de la imputación de cargos, no aplicar medida intramuros al procesado si este no es recurrente en esta conducta, y si no concurren concursos de conductas punibles, si tiene la intención de colaborar con la investigación penal, si voluntariamente este se acoge a los mecanismos alternos de solución de conflictos, como se viene aplicando en otras ramas del derecho como la civil, la laboral,

entre otras, proponemos se le imponga como sanción el pago de una póliza de garantía donde se compromete a pagar una suma monetaria para obtener el beneficio de investigación en casa, en caso de reincidir es esta conducta, es decir se debe tener en cuenta aspectos voluntarios del procesado para resarcir el daño causado a la víctima en su agravio, donde la sanción la debe afrontar el procesado pero teniendo en cuenta que esta sea acorde a los principios de dignidad humana y respetando el derecho a la salud y vida de los reos de nuestro país, se deben tener en cuenta aspectos del procesado como de la vida social que resultes evidenciados al momento de la audiencia preliminar, otro aspecto que se debería tener en cuenta es la intención que tiene el procesado en indemnizar a la víctima debido a que si la víctima es indemnizada se lograría un equilibrio que búsqueda restablecer el bien jurídico tutelado, y tendríamos reparación a la víctima, debido a que si el procesado tiene la intención de indemnizar a la víctima tendríamos una forma de terminación anormal de un proceso en la que el estado gana en la inversión económica en un proceso penal, el principio de economía procesal debe imperar en los procesos penales, en estos momentos hay que pensar es cuánto cuesta al estado invertir en un proceso penal y en mantener a ese procesado en las cárceles de nuestro país, debido a la congestión judicial que hay en nuestro país, y al problema de salubridad pública que afecta al país a raíz de la pandemia en que nos encontramos sin apartarnos de la facultad que tiene el estado para investigar y sancionar a los autores de conductas punibles *ius punendi*.

Antecedentes

La corte constitucional en sentencia C757/14, estableció que es necesario que una norma que exige que los jueces de ejecución de penas valoren la conducta punible de las personas condenadas para decidir acerca de su libertad condicional es exequible a la luz de los principios del *non bis in ídem*, del juez natural (C.P. art. 29) y de separación de poderes (C.P. art. 113). Por otra parte, dicha norma tampoco vulnera la prevalencia de los tratados de derechos humanos en el orden interno (C.P. art. 93), pues no desconoce el deber del Estado de atender de manera primordial las funciones de resocialización y prevención especial positiva de la pena privativas de la libertad (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos art. 10.3 y Convención Americana de Derechos Humanos art. 5.6). Sin embargo, sí se vulnera el principio de legalidad como elemento del debido proceso en materia penal,

cuando el legislador establece que los jueces de ejecución de penas deben valorar la conducta punible para decidir sobre la libertad condicional sin darles los parámetros para ello. Por lo tanto, una norma que exige que los jueces de ejecución de penas valoren la conducta punible de las personas condenadas a penas privativas de su libertad para decidir acerca de su libertad condicional es exequible, siempre y cuando la valoración tenga en cuenta todas las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean éstas favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional. Finalmente, la Corte concluye que los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad deben aplicar la constitucionalidad condicionada de la expresión “previa valoración de la conducta punible” contenida en el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, en todos aquellos casos en que tal condicionamiento les sea más favorable a los condenados.

Otro punto de vista acerca de la ley 1709/14, lo expreso el observatorio de transparencia y anticorrupción, y tenemos de que explica que las razones por las cuales la entrada en vigencia de la Ley 1709 de 2014, incrementó el número de los internos con el beneficio de prisión y detención domiciliaria, es necesario tomar en cuenta una razón de política criminal; otra de tipo normativo; y otra de tipo socio-jurídico. La primera de ellas responde a la formulación de una política criminal tendiente a reducir el hacinamiento en establecimientos penitenciarios y carcelarios; la segunda corresponde a la flexibilización de las medidas privativas de la libertad, a partir de la consagración de la norma en cuestión; y la tercera corresponde a las dificultades propias del seguimiento y control por parte del INPEC de los internos en detención y prisión domiciliaria impiden que esta se revoque, como se verá a continuación. 1. La formulación de una política criminal tendiente a reducir el hacinamiento en establecimientos penitenciarios y carcelarios La jurisprudencia constitucional ha planteado en múltiples ocasiones que los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena, como medidas que permiten reemplazar una pena restrictiva de la libertad por otra más favorable “tienen como fundamento la humanización del derecho penal y la motivación para la resocialización del delincuente”¹ . Por tal razón, la existencia de estos mecanismos se entiende articulada a una política criminal con una orientación humanizadora de la sanción penal, que en el marco del Estado Social de Derecho debe ser necesaria, útil y proporcionada para poder contribuir con los fines de prevención, retribución y resocialización ² . Esto quiere

decir que si los mismos fines pueden lograrse a través de otras figuras, debe preferirse la más favorable para garantizar la dignidad del condenado, dado que la más restrictiva dejaría de ser necesaria y útil. 3 1 Corte Constitucional. Sentencia T-035 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, reitera la Sentencia C-425 de 2008, de la misma Corporación. 2 Corte Constitucional. Sentencia T-596 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón, Sentencia C-565 de 1993. M.P. Hernando Herrera Vergara. y Sentencia C-806 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 3 Corte Constitucional. Sentencia C-679 de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz y Sentencia C-806 de 2002. Por esta razón, el Ministerio de Justicia y del Derecho ha propugnado por la formulación de una política penitenciaria que sea respetuosa de las garantías de la población privada de la libertad y que esté coordinada con la política penitenciaria. En este contexto, el ministerio propuso la Ley 1709 de 2014, por medio de la cual se adoptaron correcciones normativas y adecuaciones para darle coherencia con las distintas reformas que se han venido gestando en el marco de la política criminal. De esta manera, el Ministerio pretendía que a través de una adecuada aplicación de estas disposiciones se logre un impacto en el hacinamiento que sufren los establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden nacional; lo cual es posible conseguir –entre otras medidas- facilitando el acceso al beneficio de detención y prisión domiciliaria, comprendida como una medida que debe ser preferida sobre la reclusión, cuando se cumplan los requisitos establecidos en la normatividad para tal fin, por considerarse un mecanismo más favorable para cumplir con los fines de la pena y de forma articulada con la actual política criminal del Estado. 2. Flexibilización de medidas privativas de la libertad a partir de la Ley 1709 de 2014 norma que reformó el Código Penitenciario y Carcelario y otras disposiciones sobre el régimen de cumplimiento de la pena, promulgó una flexibilización de las medidas privativas de la libertad. En efecto, así lo evidencian determinadas medidas, como el hecho de que el pago de multas no pueda ser un obstáculo para acceder a la libertad o a subrogados penales, En este contexto, la norma en cuestión contempló en la prisión domiciliaria en los siguientes términos: “Podrán acceder a la detención domiciliaria personas, sin antecedentes, que hayan sido condenadas a una pena menor a ocho años de cárcel (excepto penas después de beneficios por colaboración por las autoridades). Se excluyen del beneficio quienes hayan incurrido en los delitos contemplados en el artículo 68^a”⁴. De este modo, un amplio porcentaje de la población carcelaria tendría la aptitud de optar por este beneficio, dado que

los requisitos establecidos por el legislador para tal fin no resultan excesivos, sino que por el contrario pueden ser considerados bastante laxos. Así entonces, siendo la prisión domiciliaria un subrogado penal que es considerado como un derecho para los internos que cumplan con los requisitos establecidos en la ley, y dado que estos es posible comprender por qué la flexibilización de las medidas privativas de la libertad, entre las que se encuentra la prisión domiciliaria, puede considerarse como otro factor que incide en el aumento de internos que han accedido a este beneficio.

Otro antecedente lo encontramos en el artículo denominado la efectividad de la aplicación de la ley 1709 del 20 de enero de 2014, respecto a la descongestión carcelaria en el municipio de Manizales, Marín Tangarife, Alejandro;Ortegón,Catherin este artículo tiene como finalidad establecer la efectividad de la aplicación de la Ley 1709 del 20 de enero de 2014, respecto a la descongestión carcelaria en el municipio de Manizales, y desarrolla el artículo en mención que tiene como fin establecer las bases de Estado Social de Derecho, en el que se funda el estado colombiano, que por ende se garantizan los derechos fundamentales de quienes gozan de la libertad, no obstante, en ejecución de la pena privativa de la libertad, es evidente que muchos de los derechos fundamentales de los condenados van a ser suspendidos y limitados, Sin embargo, en el caso de Derecho Fundamental al Trabajo y el Derecho al Trabajo, hay que tener en cuenta que aunque éste se limita, no se suspende y que el Estado lo debe garantizar.

Objetivos

Analizar el impacto de la expedición de la ley 1709 del 2014 ante el problema del hacinamiento carcelario con respecto a la conducta punible de hurto calificado

Materiales y Métodos

La investigación a realizar será jurídica y se desarrollará con base a la siguiente metodología:

Tipo: cualitativo

Enfoque: descriptivo

Fuente: identificación, recolección y análisis de datos de tipo jurídico, doctrinario, histórico y periodístico que guarden relevancia o relación con el tema y sub temas planteados en la misma, a tal efecto la revisión bibliográfica se constituirá como la principal fuente de información y justificación de los resultados y conclusiones arrojados el trabajo a realizar, siendo de elemental importancia para el desarrollo del mismo la aplicación de la taxonomía de Bloom.

información será clasificada y tratada acorde a su relación con los temas y subtemas planteados Técnicas de recolección de la información: La en el presente trabajo y obedeciendo a los siguientes criterios de apreciación:

- Valor epistemológico
- Relación con temas planteados
- Imparcialidad y objetividad
- Aporte al estado del arte
- Veracidad y neutralidad científica

investigación será tomado como muestra la población carcelaria del Distrito Especial, industrial y portuario de Barranquilla.

Resultado

Nuestra propuesta sería una reforma a la ley 599 del 2009, la ley 906 del 2004 y a la ley 1709 del año 2014, donde se otorgue un tratamiento más flexible a los autores de la conducta de hurto calificado, donde en fase de investigación se otorguen beneficios al procesado con el fin de que se pueda negociar con el ente acusador, figura mediante el cual el procesado indemnice a la víctima, y obtener a favor de la víctima verdad, justicia y reparación, con el compromiso de afrontar la sentencias que emitirá el juzgador, y bajo la premisa del principio de necesidad de la pena, en fase de investigación el juzgador debe tener en cuenta el estado de infra humanidad en que están sometida la población carcelaria, mi propuesta sería una medida extramuros en casa mientras de agotan las etapas del proceso penal con el fin de no agravar el fenómeno de la sobrepoblación carcelaria en nuestro país.

Si amerita la imposición, porque de acuerdo con la normatividad vigente, por el factor objetivo de la conducta de hurto calificado la pena mínima es superior de 4 años y es investigable de oficio, lo que de conformidad con el artículo 313 del c.p. penal se hace procedente solicitar la medida de aseguramiento de detención preventiva.

Pero también consideramos que se hace necesario que el legislador en una reforma, tenga en cuenta el valor de lo hurtado, porque en muchos casos son valores ínfimos que inclusive, son cuestiones bagatelares y que deben ser manejados como delitos bagatelares y no se les debe aplicar la acción penal que es de ultima ratio

el principal aporte efectuado por la investigación realizada donde se demostró que conductas como lo es el caso del hurto calificado, motivan el despliegue de una política criminal flexible que posicione la privación de la libertad como la última alternativa de tratamiento ajustado a la constitución y a los tratados internacionales.

Conclusiones

Para concluir es necesario destacar que una política criminal comprometida con la reducción de la población penitenciaria y la eliminación progresiva del fenómeno del hacinamiento carcelario, debe de aplicar de forma coherente los principios de selectividad en materia de despliegue de la acción penal y proporcionalidad entre resultado y conducta como criterio determinante para elegir que delitos ameritan la privación de la libertad, a tal efecto las conductas punibles que por su afectación mínima sobre los bienes jurídicos que agreden deben de gozar de otro tratamiento, siendo la cárcel el último recurso para reprochar las mismas.

Pero también consideramos que se hace necesario que el legislador en una reforma, tenga en cuenta el valor de lo hurtado, porque en muchos casos son valores ínfimos que inclusive, son cuestiones bagatelares y que deben ser manejados como delitos bagatelares y no se les debe aplicar la acción penal que es de ultima ratio.

Otra propuesta seria en fase de investigación es de decir al momentos de la imputación de cargos, no aplicar medida intramuros al procesado si este no es recurrente en esta conducta,

y si no concurren concursos de conductas punibles, si tiene la intención de colaborar con la investigación penal, si voluntariamente este se acoge a los mecanismos alternos de solución de conflictos, como se viene aplicando en otras ramas del derecho como la civil, la laboral, entre otras, proponemos se le imponga como sanción el pago de una póliza de garantía donde se compromete a pagar una suma monetaria para obtener el beneficio de investigación en casa, en caso de reincidir es esta conducta, es decir se debe tener en cuenta aspectos voluntarios del procesado para resarcir el daño causado a la víctima en su agravio, donde la sanción la debe afrontar el procesado pero teniendo en cuenta que esta sea acorde a los principios de dignidad humana y respetando el derecho a la salud y vida de los reos de nuestro país, se deben tener en cuenta aspectos del procesado como de la vida social que resultes evidenciados al momento de la audiencia preliminar, otro aspecto que se debería tener en cuenta es la intención que tiene el procesado en indemnizar a la víctima debido a que si la víctima es indemnizada se lograría un equilibrio que busca restablecer el bien jurídico tutelado, y tendríamos reparación a la víctima, debido a que si el procesado tiene la intención de indemnizar a la víctima tendríamos una forma de terminación anormal de un proceso en la que el estado gana en la inversión económica en un proceso penal, el principio de economía procesal debe imperar en los procesos penales, en estos momentos hay que pensar es cuánto cuesta al estado invertir en un proceso penal y en mantener a ese procesado en las cárceles de nuestro país, debido a la congestión judicial que hay en nuestro país, y al problema de salubridad pública que afecta al país a raíz de la pandemia en que nos encontramos sin apartarnos de la facultad que tiene el estado para investigar y sancionar a los autores de conductas punibles *ius punendi*, pienso que no hay la necesidad de enviar un mensaje a la sociedad con penas exageradas.

Palabras clave: Hacinamiento, cárcel, Libertad, Pena, Conducta, punible, Estado, derecho, Política, Delito, hurto, Impacto, Reinserción, congestión.

ABSTRACT

The problem of prison overcrowding generates the fundamental rights and legal assets of prisoners in our country, rights such as life, personal integrity and health, and legal assets such as human dignity, which is inspired by our legislation. From the academy, we request that this problem be solved because the prison population is part of our society.

Our research is aimed at understanding the problem of prison overcrowding and the aggressive criminal policy of the state, against the crime of qualified theft, and the academy proposes a reform to Law 599 of 2009, Law 906 of 2004 and Law 1709. of the year 2014, where more flexible treatment is granted to the perpetrators of the conduct of qualified theft, where in the investigation phase benefits are granted to the accused in order to be able to negotiate with the accusing body, figure by which the accused indemnify the victim, and obtain truth, justice and reparation in favor of the victim, with the commitment to face the sentences that the judge will issue, and under the premise of the principle of necessity of punishment, in the investigation phase the judge must have Taking into account the state of infra humanity in which the prison population is subjected, my proposal would be an extramural measure at home while the stages of the penalty process are exhausted I in order not to aggravate the phenomenon of prison overcrowding in our country. But we also consider that it is necessary for the legislator in a reform, to take into account the value of the stolen, because in many cases they are insignificant values that, even, are trifle issues and should be handled as trifles and should not be applied to them. the criminal action that is of the last ratio. Another serious proposal in the investigation phase is to say at the time of the charges, not to apply intramural measures to the defendant if he is not recurrent in this conduct, and if there are no punishable conduct contests, if he intends to collaborate with the criminal investigation, if this voluntarily avails itself of the alternative mechanisms of conflict resolution, as it has been applied in other branches of law such as civil, labor, among others, we propose that the payment of a guarantee policy be imposed as a sanction where agrees to pay a monetary sum to obtain the benefit of home investigation, in case of recidivism in this conduct, that is, voluntary aspects of the accused must be taken into account to compensate the damage caused to the victim in his tort, where the sanction must be faced

by the accused but taking into account that it is in accordance with the principles of human dignity and respecting the right to health and life of the re In our country, aspects of the defendant and social life that are evident at the time of the preliminary hearing must be taken into account, another aspect that should be taken into account is the intention of the defendant to compensate the victim due to that if the victim is compensated, a balance would be achieved that seeks to reestablish the protected legal right, and we would have reparation to the victim, because if the defendant intends to compensate the victim, we would have an abnormal termination of a process in the that the state earns on the economic investment in a criminal process, the principle of procedural economy must prevail in criminal proceedings, at the moment you have to think about how much it costs the state to invest in a criminal process and to keep that defendant in jails of our country, due to the judicial congestion that exists in our country, and to the problem of public health that affects the country as a result of the pandemic in which we find ourselves without departing from the power that the state has to investigate and punish the perpetrators of punishable conduct *ius punendi*,

Background

The constitutional court in judgment C757 / 14, established that it is necessary that a norm that requires that the judges of execution of sentences assess the punishable conduct of convicted persons to decide about their parole is exequible in light of the principles of non bis in idem, of the natural judge (CP art. 29) and separation of powers (CP art. 113). On the other hand, said norm does not violate the prevalence of human rights treaties in the internal order (CP art. 93), since it does not ignore the duty of the State to primarily attend to the functions of re-socialization and special positive prevention of punishment. custodial (International Covenant on Civil and Political Rights art. 10.3 and American Convention on Human Rights art. 5.6). However, the principle of legality is violated as an element of due process in criminal matters, when the legislator establishes that the judges for the execution of sentences must assess punishable conduct to decide on parole without giving them the parameters for it. Therefore, a norm that requires the judges of execution of sentences to assess the punishable conduct of the people sentenced to deprivation of liberty to decide about their parole is exequible, as long as the assessment takes into account all the circumstances. , elements and considerations made by the criminal judge in the conviction,

be they favorable or unfavorable to the granting of parole. Finally, the Court concludes that the judges for the execution of penalties and security measures must apply the conditioned constitutionality of the expression "prior assessment of punishable conduct" contained in article 30 of Law 1709 of 2014, in all those cases in which such conditioning is more favorable to the condemned.

Another point of view about law 1709/14, was expressed by the observatory of transparency and anti-corruption, and we have to explain that the reasons why the entry into force of Law 1709 of 2014, increased the number of inmates with the benefit of prison and house arrest, it is necessary to take into account a reason of criminal policy; another of a regulatory nature; and another of a socio-legal type. The first of these responds to the formulation of a criminal policy aimed at reducing overcrowding in penitentiary and prison establishments; the second corresponds to the relaxation of the measures of deprivation of liberty, based on the consecration of the norm in question; and the third corresponds to the difficulties inherent to the monitoring and control by the INPEC of the inmates in house arrest and detention, which prevent this from being revoked, as will be seen below.

1. The formulation of a criminal policy aimed at reducing overcrowding in penitentiary and prison establishments

Constitutional jurisprudence has stated on multiple occasions that criminal surrogates or substitute mechanisms of punishment, as measures that allow one restrictive sentence of liberty to be replaced by another more favorable "are based on the humanization of criminal law and the motivation for the re-socialization of the offender" ¹. For this reason, the existence of these mechanisms is understood to be articulated to a criminal policy with a humanizing orientation of criminal sanction, which in the framework of the Social Rule of Law must be necessary, useful and proportionate in order to contribute to the purposes of prevention, retribution and re-socialization ². This means that if the same ends can be achieved through other figures, the most favorable should be preferred to guarantee the dignity of the condemned, since the most restrictive would no longer be necessary and useful.

- ³ 1 Constitutional Court. Judgment T-035 of 2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, reiterates Judgment C-425 of 2008, of the same Corporation.
- ² Constitutional Court. Judgment T-596 of 1992. M.P. Ciro Angarita Barón, Judgment C-565 of 1993. M.P. Hernando Herrera Vergara. and Judgment C-806 of 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
- ³ Constitutional

Court. Judgment C-679 of 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz and Judgment C-806 of 2002. For this reason, the Ministry of Justice and Law has advocated the formulation of a prison policy that is respectful of the guarantees of the population deprived of liberty and that is coordinated with the prison policy. In this context, the ministry proposed Law 1709 of 2014, through which regulatory corrections and adaptations were adopted to give it coherence with the different reforms that have been taking place within the framework of criminal policy. In this way, the Ministry intended that through the proper application of these provisions an impact be achieved in the overcrowding suffered by national prison and prison establishments; which is possible achieve -among other measures- facilitating access to the benefit of house arrest and imprisonment, understood as a measure that should be preferred over confinement, when the requirements established in the regulations for that purpose are met, as it is considered a more favorable mechanism to comply for the purposes of punishment and articulated with the current criminal policy of the State. 2. Loosening of custodial measures based on Law 1709 of 2014, a regulation that reformed the Penitentiary and Prison Code and other provisions on the regime of serving the sentence, promulgated loosening of custodial measures. Indeed, this is evidenced by certain measures, such as the fact that the payment of fines cannot be an obstacle to accessing liberty or criminal subrogation. In this context, the norm in question contemplated in home prison in the following terms: "People without a record who have been sentenced to less than eight years in prison (except after-benefit penalties for collaboration by the authorities) will be able to enter house arrest. Those who have incurred in the crimes contemplated in article 68^a are excluded from the benefit"⁴. In this way, a large percentage of the prison population would have the ability to opt for this benefit, given that the requirements established by the legislator for this purpose are not excessive, but on the contrary can be considered quite lax. Thus, being home prison a criminal surrogate who is considered as a right for inmates who meet the requirements established by law, and given that these are possible to understand why the flexibility of custodial measures, among the that home prison is found, can be considered as another factor that affects the increase of inmates who have accessed this benefit.

The article called the effectiveness of the application of law 1709 of January 20, 2014, regarding prison decongestion in the municipality of Manizales, Marín Tangarife, Alejandro;

Ortegón, Catherin, this article aims to establish the effectiveness of the application of Law 1709 of January 20, 2014, regarding prison decongestion in the municipality of Manizales, and develops the aforementioned article that aims to establish the bases of Social Status of Law, on which the Colombian state is founded, which therefore, the fundamental rights of those who enjoy freedom are guaranteed, however, in execution of the custodial sentence, it is evident that many of the fundamental rights of the convicted are going to be suspended and limited, However, in the case of Fundamental Right to Work and the Right to Work, it must be borne in mind that although this is limited, it is not Suspend and that the State must guarantee it.

Objective

Analyze the impact of the issuance of Law 1709 of 2014 in the face of the problem of prison overcrowding with respect to the conduct punishable of qualified theft

Materials and Methods

The research to be carried out will be legal and will be developed based on the following methodology:

Population and sample: for the development of this

Type: qualitative

Focus: descriptive

Source: identification, collection and analysis of legal, doctrinal, historical and journalistic data that are relevant or related to the topic and sub-themes raised in it, for this purpose the bibliographic review will become the main source of information and justification of the results and conclusions of the work to be carried out, the application of Bloom's taxonomy being of elemental importance for its development.

Techniques for collecting information: The information will be classified and treated according to its relationship with the themes and subtopics raised in this work and obeying the following criteria of appreciation:

- Epistemological value
- Relationship with issues raised
- Impartiality and objectivity
- Contribution to the state of the art
- Scientific truthfulness and neutrality

Research will be taken as a sample of the prison population of the Special, Industrial and Port District of Barranquilla.

Results

Our proposal would be a reform to law 599 of 2009, law 906 of 2004 and law 1709 of 2014, where more flexible treatment is granted to the perpetrators of the conduct of qualified theft, where benefits are being granted in the investigation phase to the defendant in order to be able to negotiate with the accusing entity, figure by which the defendant compensates the victim, and obtain truth, justice and reparation in favor of the victim, with the commitment to face the judgments that the judge will issue , and under the premise of the principle of necessity of punishment, in the investigation phase, the judge must take into account the state of infra humanity in which the prison population is subjected, my proposal would be a measure outside the home while the stages of criminal process in order not to aggravate the phenomenon of prison overcrowding in our country.

If the imposition merits, because according to the current regulations, for the objective factor of the conduct of qualified theft, the minimum sentence is greater than 4 years and is investigable ex officio, which in accordance with article 313 of the CPP appropriate to request the measure of preventive detention assurance.

But we also consider that it is necessary for the legislator in a reform, to take into account the value of the stolen, because in many cases they are insignificant values that, even, are trifle issues and should be handled as trifles and should not be applied to them. the criminal action that is of the last ratio

the main contribution made by the investigation carried out where it was shown that behaviors such as the case of qualified theft, motivate the deployment of a flexible criminal policy that positions the deprivation of liberty as the last alternative treatment adjusted to the constitution and treaties international.

Conclusions

To conclude, it is necessary to highlight that a criminal policy committed to the reduction of the prison population and the progressive elimination of the phenomenon of prison overcrowding, must apply in a coherent way the principles of selectivity regarding the deployment of criminal action and proportionality between result and conduct as a determining criterion for choosing which crimes merit the deprivation of liberty, for this purpose punishable behaviors that due to their minimal effect on the legal assets they attack must enjoy other treatment, with prison being the last resort to reproach them.

But we also consider that it is necessary for the legislator in a reform, to take into account the value of the stolen, because in many cases they are insignificant values that, even, are trifle issues and should be handled as trifles and should not be applied to them. the criminal action that is of the last ratio.

Another serious proposal in the investigation phase is to say at the time of the charges, not to apply intramural measures to the defendant if he is not recurrent in this conduct, and if there are no punishable conduct contests, if he intends to collaborate with the criminal investigation, if this voluntarily avails itself of the alternative mechanisms of conflict resolution, as it has been applied in other branches of law such as civil, labor, among others, we propose that the payment of a guarantee policy be imposed as a sanction where agrees to pay a monetary sum to obtain the benefit of home investigation, in case of recidivism in this conduct, that is, voluntary aspects of the accused must be taken into account to compensate the damage caused to the victim in his tort, where the sanction must be faced by the accused but taking into account that it is in accordance with the principles of human dignity and respecting the right to health and life of the re In our country, aspects of the defendant and social life that are evident at the time of the preliminary hearing must be taken into account, another aspect that should be taken into account is the intention of the defendant to compensate the victim due to that if the victim is compensated, a balance would be achieved that seeks to reestablish the protected legal right, and we would have reparation to the victim, because if the defendant intends to compensate the victim, we would have an abnormal termination of a process in the that the state earns on the economic investment in a criminal process, the principle of procedural economy must prevail in criminal proceedings, at the

moment you have to think about how much it costs the state to invest in a criminal process and to keep that defendant in jails of our country, due to the judicial congestion that exists in our country, and to the problem of public health that affects the country as a result From the pandemic in which we find ourselves without departing from the power that the state has to investigate and punish the perpetrators of punishable conduct *ius punendi*, I think that there is no need to send a message to society with exaggerated penalties.

KeyWords: : Prison overcrowding, Liberty, Criminal Punishable conduct Social state of law Criminal policy, Qualified theft crime, Impact, Social reinsertion

REFERENCIAS

- Asamblea nacional constituyente. Constitución política de Colombia. Editorial Legis 1991.
- Congreso de la república de Colombia. Ley 599 del año 2000 o código penal colombiano. Edición Leyer 2014.
- Congreso de la república de Colombia. Ley 1709 del año 2014. Editorial unión 2018
- Congreso de la república de Colombia. Ley 65 del año 1993 o Código penitenciario y carcelario. Editorial Leyer 2013
- Corte Constitucional colombiana. sentencia de radicado C- 936 del año 2010
- <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-936-10.htm>
- Corte Constitucional colombiana. sentencia de radicado C- 762 del año 2002
- <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-401-03.htm>
- Corte Constitucional colombiana. sentencia de radicado C- 646 del año 2001
- <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-646-01.htm>
- Corte Constitucional colombiana. sentencia de radicado T – 266 del año 2013
- <https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/T-266-13.htm>
- Corte Constitucional colombiana. sentencia de radicado C – 757 del año 2014
- <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-757-14.htm>
- Corte Constitucional colombiana. Sentencia de radicado T – 286 del año 2011
- <https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/T-286-11.htm>
-
- Corte Constitucional colombiana. sentencia de radicado T – 153 del año 1998
- <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-388-13.htm>
- Corte Constitucional colombiana. sentencia de radicado T – 388 del año 2013
- <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-388-13.htm>
- Corte Constitucional colombiana. sentencia de radicado T - 762 del año 2015
- <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-762-15.htm>
- Corte Constitucional colombiana. sentencia de radicado T - 197 del año 2017
- <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-197-17.htm>
- Corte Constitucional colombiana. sentencia de radicado T – 267 del año 2018

- <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-267-18.htm>
- Corte Constitucional colombiana. Sentencia de radicado T-276 del año 2016
- <https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/T-276-16.htm>
- Corte Constitucional colombiana. Sentencia de radicado T-232 del año 2017
- <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-232-17.htm>
- Arango, Laura. La utopía de la resocialización. Editorial universidad gran Colombia. 2013
- Moron, Juan Carlos. Grave caso de hacinamiento en la cárcel El Bosque de Barranquilla. Universidad del norte. 2018
- Beccaria, Cesare de los delitos y las penas. Editorial Fondo de Cultura Económico. 2000.
- Eastman, Carlos Patricio. La resocialización criminal en Colombia: un fracaso. Editorial universal 2015.
- Diario el tiempo. Motín e incendio en la cárcel Modelo de Barranquilla. 28 de enero del 2014
- <https://www.elheraldo.co/judicial/motin-e-incendio-en-la-carcel-modelo-deja-10-muertos-y-decenas-de-heridos-140768>
- Instituto nacional penitenciario y carcelario. Impacto Ley 1709 de 2014 Primer Informe 2015
- <https://www.inpec.gov.co/documents/20143/49294/MOMENTOS+HISTORICOS+INPEC+2015-1.pdf/705ba5dc-a6eb-38f5-bc2a-a8da3d1895bb?version=1.0>
- Ministerio de justicia. Sobre la ley 1709 de 2014
- <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56484>